

mandar, puesto que debe dar inmediatamente las cosas de la misma calidad y en la misma cantidad; mas si el deudor está insolvente, el propietario tendrá interés. Lo que prueba que el consumo no es un motivo perentorio, es que el deudor puede demandar aunque las cosas pagadas hayan sido consumidas, cuando lo han sido de mala fe; más, como la demanda no es una reivindicación en teoría, poco importa que las cosas se consuman ó nó, ni la buena ó mala fe del acreedor: la demanda debía haber sido admitida por solo el hecho de ser nulo el pago.

502. ¿Cuándo podrá decirse que las cosas se han consumido? No deja de tener su dificultad la cuestión cuando es una suma de dinero la que se ha pagado, pues aunque en realidad el dinero no se consume, se admite esta palabra cuando se ha gastado ó cuando el acreedor ha dispuesto de él de alguna manera aunque sea en provecho de un tercero. ¿Qué deberá decidirse si el acreedor solamente ha mezclado con las suyas, las monedas que el deudor le pagó? La cuestión es controvertida: unos, estrechados con la autoridad del derecho romano, dicen que la reivindicación no puede tener lugar, y otros admiten la acción del deudor. Nosotros creemos que la doctrina romana es extraña al debate. No se trata de reivindicar sino de demandar por sucesión de una demanda en nulidad. ¿Qué importa que las monedas sean distintas y que no puedan reconocerse? Lo único que importa es saber si el acreedor las tiene aún, y es claro que las tiene, puesto que se supone que no ha dispuesto de ellas gastándolas, lo cual decide la cuestión. (1)

### 3 Derecho del propietario.

503. Es de derecho común que el propietario pueda rei-

1 Durantón, t. XII, pág. 48, núm. 33. Compárese Demolombe, tomo XXVII, pág. 79, núms. 107 y 108.

vindicar las cosas que le pertenecen y que han sido dadas en pago al acreedor. No hay ninguna dificultad cuando se trata de un inmueble, porque el propietario tiene la reivindicación, á no ser que el acreedor le oponga la prescripción. De ordinario son cosas muebles las que son objeto del pago y el propietario tiene también el derecho de reivindicarlas; mas casi siempre será ilusorio porque el acreedor invocará la máxima consagrada por el art. 2,279: "Tratándose de muebles, es necesario el título para la posesión." En efecto, esta máxima significa que el propietario no puede reivindicar cosas muebles corporales contra el poseedor de buena fe; de donde se sigue que el propietario solo puede reivindicar cuando el acreedor es de mala fe ó cuando ha recibido créditos en pago. Esta es la opinión general y en el mismo sentido está la jurisprudencia, (1)

Citaremos un caso que se ha presentado ante la Corte de Casación y que demuestra en qué circunstancias se hace el pago con dinero que no pertenece al deudor. Una sociedad terminó sus operaciones quedando encargado de la liquidación un mandatario. ¿Cuáles eran sus poderes? Como no era un gerente que tuviera el derecho de administrar, sus poderes se limitaban á los actos necesarios para hacer la liquidación de la sociedad. El liquidador pagó una deuda que tenía personal, con los fondos de la caja social, lo cual fué un verdadero abuso de confianza traspasando su mandato. Según el art. 1,238, este pago fué nulo, y la sociedad propietaria del dinero pudo reivindicarlo. Los herederos del acreedor quisieron sostener que este había consumido el dinero de buena fe; mas lejos de esto, había complicidad. Entonces ellos sostuvieron que en esta suposición, el pago constituía un delito del cual era cómplice el autor, y que por consiguiente, ellos quedaban cubier-

1 Aubry y Rau, t. IV, pág. 152, pfo. 316. Metz, 14 de Agosto de 1837 (Dalloz, 1867, 2, 188).



tos por la prescripción. La Corte negó esta singular defensa alegando que no había complicidad legal y sobre el poder en casación, intervino una sentencia de denegada casación que reprodujo los motivos que acabamos de analizar. (1)

504. Generalmente se sigue la doctrina que acabamos de exponer. Un autor que goza de una gran reputación en Francia la combate. Debemos detenernos un instante en esta controversia, nada más para poner en guarda á nuestros jóvenes lectores contra las opiniones nuevas, cuando estas no tienen ningún fundamento en el texto y en el espíritu de la ley. Todo es falso en el sistema de M. Demolombe, el principio que le sirve de punto de partida y las consecuencias que deduce. (2)

Se pretende que el art. 1,238 permite al propietario obrar en demanda contra el acreedor, salvo cuando este ha consumido las cosas de buena fe. Primer error. No vacilamos en servirnos de esta palabra un poco dura, porque el texto mismo de la ley atestigua contra los que lo invocan, según el art. 1,238. ¿Es cuestión del propietario? Nó, y el mismo legislador no pudo soñarlo, porque el solo objeto de este artículo es determinar una de las condiciones requeridas para que el pago sea válido, la capacidad del deudor. Después la ley dice cuál será el efecto del pago si el deudor no tiene esta capacidad. Las cuestiones que el legislador debía de resolver son las de cuando puede el deudor demandar y cuando no lo puede. En este debate, el propietario está fuera de causa, siéndole extraño el pago. Así, pues, no puede nacer para él ninguna acción del pago hecho por un deudor sin derecho.

Decimos que el texto resiste á la interpretación que se

1 Denegada casación, 10 de Noviembre de 1858 (Dalloz, 1858, 1, 447).

2 Demolombe, t. XXVII, págs. 105 y siguientes, núms. 115-118.

le quiere dar, porque habla de una acción en "demanda" y no habla de "reivindicar." La demanda es una acción personal que proviene de un lazo de obligación, mientras que la reivindicación es una acción real que nace del derecho de propiedad. El deudor demanda lo que pagó sin derecho en virtud de un convenio, y el propietario reivindica su cosa contra todo poseedor sin preocuparse de la causa de esta posesión. ¿A quién dá el art. 1,238 la acción en demanda? A aquel que hizo el pago: poco importa que la ley no nombre al deudor, porque el texto solo á él puede aplicarse. En efecto, el art. 1,238 no habla solamente de la demanda que se ejerce cuando el pago se hace por el que no es propietario de la cosa pagada, habla también del caso en que el propietario incapáz dá su propia cosa en pago; en este caso, no puede ser cuestión mas que del deudor que demanda; por consiguiente, así en el texto como en el espíritu de la ley, es preciso decir que el artículo 1,238 es extraño al tercero propietario.

Después de haber dicho que el propietario tiene una acción en demanda, en virtud del art. 1,238, M. Demolombe pretende que hay contradicción entre esta disposición y la del art. 2,279, porque ésta no dá al propietario el derecho de reivindicar la cosa mueble contra el acreedor poseedor de buena fe, mientras que el art. 1,238 le dá este derecho por todo el tiempo que el acreedor no la haya consumido de buena fe. La antinomia es puramente imaginaria. ¿Como podría haber contradicción entre el artículo 1,279 que se ocupa de los derechos del propietario y el art. 1,238, que no habla de él? Antes de admitir esta pretendida antinomia, falta ver si hay una razón que explique la derogación que el art. 1,238 tendría, en esta suposición, á una máxima fundamental de nuestro derecho consagrado por el art. 2,279 y reproducido, en el título de las "Obligaciones" por el art. 1,141. ¿Por qué el propietario



había de tener derechos mas extensos contra el tercer poseedor, cuando este posea como acreedor, que cuando posea como comprador? ¿Es que, en una y otra hipótesis, no posee á título de propietario? Y siendo la posesión la misma, ¿los derechos que proceden no deben ser idénticos?

Para conciliar disposiciones que se pretende ser contradictorias, se propone una distinción tan inadmisible como todas las premisas. Si el pago tiene por objeto una cosa determinada, el art. 2,279 será aplicable; mientras que, cuando la obligación tiene por objeto una cosa indeterminada, se aplicará el art. 1,233. Ya hemos combatido esta distinción (núm. 500). Para tener derecho de distinguir cuando la ley es general, es preciso que los principios nos autoricen. ¿Cuál será el motivo jurídico por el cual el acreedor poseedor de buena fe de una cosa en virtud de un pago no podrá rechazar la acción en reivindicación, teniendo por objeto la obligación una cosa indeterminada? Lo buscaremos inútilmente. Mejor dicho: el espíritu de la ley lo mismo que el texto resisten enérgicamente á la distinción que se quiere introducir. El art. 2,279 está fundado en interés del comercio, ¿es, por acaso, que el comercio no está interesado á quedar al abrigo de una reivindicación cuando se trata de cantidades ó de cosas que se consumen por el uso que hace el poseedor?

## II. Del pago hecho por un incapaz.

505. El art. 1,238 exige dos condiciones para que el deudor pueda pagar válidamente: debe ser propietario de la cosa dada en pago y capaz de enajenar. Entonces es cuando el deudor será propietario, siendo incapaz de enajenar, el pago es nulo. En efecto, la ley dice que para pagar "válidamente" es preciso ser capaz de enajenar la cosa pagada. La nulidad resulta, por otra parte, de los principios

generales de derecho: los actos que un incapaz no tiene derecho de hacer son considerados nulos según su incapacidad.

506. La ley parece poner en la misma línea la condición de poder enajenar y la de ser propietario; sin embargo, hay una diferencia importante. Cuando el que paga no es propietario, puede invocarse la nulidad por el acreedor y por el deudor, mientras que, resultando la nulidad de la incapacidad, es esencialmente relativa, porque solo el incapaz puede alegarla. La ley pone este principio para las personas á quienes declara incapaces de obligarse: los menores, los sujetos á interdicción y las mujeres casadas pueden atacar sus obligaciones por causa de incapacidad; mas las personas capaces de obligarse no pueden oponer la incapacidad del menor, del que está sujeto á interdicción ó de la mujer casada con quienes contratan (art. 1,225, 225). Es cierto que el que paga no se obliga á nada, sólo cumple una obligación. Mas si el art. 1,125 no es aplicable al pie de la letra, el espíritu de la ley no deja ninguna duda. El principio establecido por el art. 1,125 resulta de la naturaleza misma de la nulidad que la ley establece cuando una persona incapaz hace un acto que no tiene derecho de hacer; la nulidad es esencialmente relativa, establecida para proteger al incapaz, por consiguiente, él solo puede alegarla.

Falta saber cuáles son las personas incapaces de enajenar. Acabamos de recordar que el art. 1,124 declara incapaces de "contratar" á los menores, á los sujetos á interdicción y á las mujeres casadas. El que es incapaz de contratar, es, en general, incapaz de enajenar, puesto que las enajenaciones se hacen por vía de contrato. No obstante esto, no es cierto sino con una restricción, en lo que concierne á las mujeres casadas; es preciso consultar los contratos matrimoniales de los esposos, cuyos contratos



pueden, en cierto sentido, derogar la incapacidad de la mujer; así la mujer separada de bienes, puede disponer de su mueble enajenándolo, mientras que no puede enajenar sus inmuebles sin el consentimiento de su marido (artículos 1,449, 1,536, 1,576); así, pues, podrá hacer un pago mueble, mas es incapaz de pagar un inmueble, si el pago tiene por objeto trasladar la propiedad.

507. La diferencia que acabamos de señalar entre el deudor que no es propietario de la cosa dada en pago del que no es capaz de enajenar, tiene una consecuencia importante en lo que concierne á los riesgos. Cuando la cosa dada en pago por el que no es propietario, se pierde por caso fortuito, la pérdida es para el deudor. Por el contrario, si el deudor incapaz, paga una cosa cuya propiedad tiene y que se pierde por caso fortuito, la pérdida es para el acreedor, y la razón es que el pago es válido con respecto al acreedor, y no podrá ser anulado mas que por la demanda del deudor incapaz, y si la cosa se pierde, el incapaz se guardará bien de obrar en nulidad, puesto que en caso de anulación, la cosa se pierde para él, quedando obligado á pagar otra. Desde que el deudor no obra, el pago permanece válido, y, por consiguiente, la pérdida debe ser para el acreedor. (1) Notemos que en este caso la cosa se pierde para el que no es propietario; en efecto, la propiedad no puede ser trasladada al deudor incapaz de enajenar, y, por consiguiente, el deudor permanece propietario, no siendo éste, sin embargo, quien soporta los riesgos. Nueva prueba de que la máxima *Res perit Domino* (2) no es aplicable cuando la cosa que se pierde, es objeto de una obligación.

508. El deudor incapaz de embargar puede demandar la nulidad del pago y el tribunal deberá pronunciarla des-

1 Colmet de Santerre, t. V, pág. 326, núm. 177 bis, XVI.

2 La cosa perece para su dueño. N. del T.

de que el incapaz pruebe su incapacidad. Se pregunta, ¿qué interés tiene de obrar en nulidad? ¿bajo qué pena habrá obtenido la nulidad del pago que deberá hacer otro? ¿no es más sencillo sostener el que ya se ha hecho? Se responde que puede haber interés en demandar la nulidad. Desde luego, si la deuda es á plazo y se ha pagado antes del vencimiento del término, puede repetirse la cosa pagada, y hay interés de hacerlo para gozar de la cosa hasta que deba entregarse al acreedor. Cuando la cosa es determinada solamente en cuanto á su especie, el deudor se libra pagando una cosa de un valor medio. Si el incapaz ha pagado por imprudencia una cosa de un precio grande, tiene interés en repetirla, salvo el derecho de pagar una cosa de un valor ordinario, como puede hacerlo. Por fin, si el incapaz deudor de una deuda alternativa, ha elegido la cosa de mayor valor, podrá repetirla y pagar la otra. (1) Se vé que los casos en que el deudor incapaz tiene interés en demandar la nulidad del pago, son muy raros, y que lo más frecuentemente, el pago no será atacado; de suerte que esta materia es de pura teoría.

509. Hay un caso en que el deudor, aunque incapaz, no puede obrar en nulidad. El pago de una cosa que se consume por el uso, no puede repetirse contra el acreedor que la ha consumido de buena fe; aunque el pago se haya hecho por un incapaz de enajenar. Todos los autores critican esta disposición. (2) El deudor tiene el derecho de demandar la nulidad del pago, en razón de su incapacidad; no se vé por qué no puede ejercer este derecho cuando el acreedor ha consumido la cosa; todo lo que resulta de este consumo, es que el pago ha aprovechado al acreedor; ¿pero

1 Mourlón, *Repeticiones*, t. II, págs. 598 y siguientes.

2 Demolombe, t. XXVII, pág. 113, núm. 131 y los autores que cita.



qué importa? Esto no impide que el pago sea nulo en interés del incapaz. La ley lo ampara con su protección, permitiéndole obrar en nulidad, y después le quita su protección por la única razón de que el acreedor ha consumido la cosa. Ha errado asemejando al deudor incapaz con el deudor que no es propietario; aun respecto de éste, la disposición del art. 1,238 difícilmente se justifica (núm. 501); y llega á ser inexplicable cuando se trata del deudor incapaz de enajenar.

510. El art. 1,238 supone que se trata de un pago traslativo de propiedad. Cuando el pago se hace en cumplimiento de un contrato que ya ha transferido la propiedad, tal como la venta, el deudor, aunque incapaz de enajenar, puede válidamente hacer la entrega de la cosa. Así, la mujer enajena un inmueble que le pertenece, con autorización de su marido, después hace la entrega sin haber sido autorizada; ¿podrá demandar la nulidad de este pago? Nó, no está en el caso del art. 1,238; ni se trata ya de transferir la propiedad de la cosa dada en pago, pues la propiedad está ya adquirida por el comprador, y solo falta hacerle la entrega; este es un hecho puramente material; la mujer no se perjudica prestándolo, y mejora, por el contrario, su condición, porque el comprador podría exigir la entrega y hacer reclamos que la mujer previene entregando la cosa.

Esto supone que la obligación que cumple la mujer es válida. Si el contrato que la mujer cumple fuese nulo, conservaría el derecho de demandar la nulidad á pesar del cumplimiento que le ha dado. Esto no es ya una cuestión de validez del pago, se trata de saber si la obligación es válida, y suponemos que es nula; la mujer, pagando, no puede renunciar al derecho que tiene de demandar la nulidad. Esto sería una confirmación, y el incapaz no puede confirmar mientras dura su incapacidad. (Art. 1228) Lo

que decimos de la mujer casada se aplica á todos los incapaces. (1)

*Núm. 4. ¿A quién debe ó puede hacerse el pago?*

511. El artículo 1239 dice que "el pago debe hacerse al acreedor ó á cualquiera que tenga poder de él ó que sea autorizado judicialmente ó por la ley, para recibir por él."

*II. Del pago hecho al acreedor.*

512. El pago debe hacerse al acreedor, dice el artículo 1239. Esta es la consecuencia natural de la estipulación que el acreedor ha hecho contratando. El deudor está obligado para con el acreedor á dar ó á hacer alguna cosa, y por tanto, está obligado á pagar lo que debe á aquel con quien se ha obligado. El acreedor tiene el derecho de exigir la prestación que es objeto del contrato, y el deudor está obligado á cumplirla.

513. El acreedor trasmite su derecho a sus herederos, y él debe, por consiguiente pagar á los herederos. Como el crédito se divide entre estos, en razón de su parte hereditaria, cada heredero llega á serlo solo en cuanto á la parte por la que es heredero, de donde se sigue que el deudor no puede pagar válidamente á cada uno de los herederos más que la porción que le pertenece en el crédito. Esto sucede desde la apertura de la sucesión aun antes de la partición, porque esta es la ley que divide los créditos, independientemente de todo convenio. Los herederos, dice el art. 1220, no pueden demandar la deuda sino por las partes de que son dueños como representantes del acreedor; y según el art. 724, los herederos son *dueños* de pleno

1 Aubry y Rau, t. IV, pág. 151, notas 14 y 15, pfo. 316 y los autores que citan. Hay que agregar á Demolombe, t. XXVII, página 115, núm. 127.



derecho de los bienes, derechos y acciones del difunto, y lo son desde el instante de la muerte del autor de la herencia. Este es el principio acostumbrado en el embargo: "El vivo representa al muerto, como su heredero más próximo."

No hacemos más que transcribir principios elementales escritos en la ley. Así pues, no sin extrañeza hemos leído en un repertorio que mientras la sucesión está indivisa, el deudor debe llamar á todos los herederos para hacerles el pago. Se cita en apoyo de esta extraña proposición á Pothier y á todos los autores modernos. Y se encuentra que Pothier así como los autores modernos dicen en términos absolutos que las deudas se dividen entre los herederos según su parte hereditaria, sin hablar de la indivisión y de la partición, sino para notar que el acta de partición puede dar á uno de los herederos del acreedor el poder de percibir el crédito entero. Se cita también como aplicable el pretendido principio, según el cual, el pago durante la indivisión, no podrá hacerse sino á todos los herederos, y una sentencia que decidió que el reembolso de un crédito inmueble, y especialmente de una renta vitalicia, debe para ser válido, hacerse á todos los herederos en tanto que la herencia esté en indiviso. (1) Basta leer la sentencia de la Corte de París para convencerse que está establecida, no sobre la división de los créditos ordinarios, sino sobre una renta vitalicia reputada inmueble, y esto sin decir que los inmuebles no se dividen de pleno derecho. Pero va también sin decir que los créditos se dividen de pleno derecho y antes de toda partición; cómo los autores y los tribunales podrían decir lo contrario de lo que está escrito en los arts. 724 y 1,220? La verdad es que la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en decir lo contrario de lo

1 Dalloz, palabra *Obligaciones* núm. 1,680. París, 21 Prarial, año X (Ib.).

que se les hace decir. (1) Hacemos esta nota en interés de nuestros jóvenes lectores que generalmente se sirven del repertorio que nuestro deber nos manda criticar. Que ellos no reconozcan otra autoridad que la de la ley y los principios que se desprenden.

514. Se entiende por acreedor, dice Pothier, no solamente la persona misma con quien ha contratado el deudor, sino todos aquellos que han sucedido en su crédito, aun á título particular. Aquel á quien el acreedor ha cedido su crédito, sea por venta, sea por donación, llega á ser el acreedor; pero no es poseedor del crédito respecto de los terceros, sino por el aviso que dá al deudor, de la cesión, ó por la aceptación que éste hace de la translación (art. 1,690.) Cuando estas formalidades están cumplidas, el deudor debe pagar al cesionario. Por el contrario, el antiguo acreedor cesa de serlo y el deudor no puede ya pagarle. (2) Trataremos los detalles y las dificultades de este punto en el título de la "Venta," que es el sitio de la materia.

515. El pago no siempre puede hacerse al acreedor; para que el pago sea válido se necesita que el acreedor sea capaz de recibirlo, pues hecho al acreedor incapaz, el pago es nulo (art. 1,241). ¿Cuáles son los incapaces? La ley no se explica sobre este punto, solo se ocupa de los incapaces bajo el punto de vista de las obligaciones que contraen: los incapaces de contratar son los menores, los sujetos á la interdicción y las mujeres casadas. Recibir un pago no es contratar, es extinguir la obligación, y como el incapaz recibe lo que se le debe, se enriquece y podría creerse que debe tener el derecho de mejorar su posición. La respuesta es fácil; la incapacidad de aquél á quien se hace un pago, podría tener por consecuencia la pérdida

1 Véase el tomo X de estos *Principios*, pág. 277, núm. 213.

2 Pothier, *De las Obligaciones*, núm. 502.



del crédito, y así, no basta recibir lo que no se debe, se necesita también darle un buen empleo, si no la disipación de lo que recibimos anularía el beneficio del crédito. Hé ahí por qué la ley se muestra más severa para el pago hecho á un incapaz que para los otros actos de administración. Así, el menor emancipado tiene la administración y el goce de su fortuna, y, sin embargo, no puede recibir un capital mueble ni librarse de una carga sin la asistencia de su curador; el art. 482 dá la razón; el curador tiene el encargo de cuidar el empleo del capital recibido. El tutor tiene poderes más extensos, pero también el menor tiene una garantía real en la hipoteca legal que la ley le concede; cuando esta garantía es insuficiente, la ley limita el derecho que el tutor tiene de recibir los capitales debidos en su provecho (Ley Hip., arts. 56 y 57). Volveremos á ver los detalles y las dificultades en los títulos en que se trata de los incapaces. (1)

*II. Del pago hecho al que tiene poder del acreedor para recibirlo.*

1476 516. El pago hecho á los que tienen poder del acreedor para recibir por él, se reputa hecho al acreedor mismo, y, por consiguiente, es tan válido como si hubiese sido hecho al acreedor. Esto es lo que dice Pothier, según una ley romana. (2) El Código Civil dice más: no solamente puede hacerse el pago al mandatario, sino que "debe" hacerse al que tiene poder del acreedor judicial ó de la ley (artículo 1,239). El mandato puede, pues, ser legal, judicial ó convencional.

517. ¿Quiénes son los autorizados por la ley para recibir por el acreedor? Cuando éste es incapaz, la ley vela

1 Durantón resume la materia (t. XII, pág. 53, núms. 36-43). Colmet de Santerre. t. V, pág. 330, núm. 180 bis, I.

2 Pothier, *De las Obligaciones*, núm. 506.

porque sus derechos sean ejercidos por un representante. Así, el tutor representa al menor y al sujeto á interdicción en todos los actos civiles (art. 450). Los que tienen la posesión representan al ausente (art. 134). En cuanto á la mujer casada, sus derechos, así como los del marido sobre los bienes de la mujer dependen de los pactos ó capitulaciones matrimoniales y del régimen bajo el cual se han casado los esposos. Trataremos esta materia en el título "Del Contrato de Matrimonio y en los títulos que dedica el Código á los incapaces. (1)

Hay incapaces de los que la ley no se ocupa. En los términos del art. 389, el padre es, durante el matrimonio, administrador de los bienes personales de sus hijos menores. ¿Cuáles son los poderes del administrador legal? En lo que se refiere al derecho de recibir lo que se debe al hijo menor, no hay duda alguna; el padre tiene este derecho sin disputa alguna. Este es un derecho que pertenece al tutor, y, por tanto, también al padre administrador; en cuanto á las garantías que el pupilo tiene contra su tutor, la ley no ha creído deber concederlas al menor contra su padre. (2)

518. El poder puede ser concedido judicialmente. Hay mandatarios generales que el tribunal nombra en virtud de la ley; tal es el administrador que tiene el derecho de dar al ausente durante el primer periodo de la ausencia; (art. 112) y el administrador provisional que el art. 497 permite nombrar, cuando se pide la interdicción de una persona. Podría colocarse entre estos mandatarios á los que se dá la posesión, puesto que son y se les dá por un fallo. Pero es mas jurídico considerar su mandato como legal, puesto que es la ley la que designa á los herederos presuntos á quienes debe confiarse la administración de

1 Véase el resumen en Durantón, t. XII, pág. 86, núms. 54-59.

2 Tolosa, 25 de Febrero de 1845 (Dalloz, 1845, 4, 438). Véase el tomo IV de estos Principios, pág. 469, núm. 303.